DOS MINUTOS DE DOCTRINA

30 de agosto de 2016

GUERRA ENCARNIZADA ENTRE EMPRESAS

Una empresa petrolera y una distribuidora de sus productos entraron en una guerra sin cuartel. ¿Pudo esa situación justificar la ruptura del contrato que las unía?

Una empresa que explotaba una estación de servicio en Trelew (Chubut) estuvo vinculada con Petrobras Energía SA (y sus antecesoras) mediante un contrato de largo plazo que ambas denominaron “de concesión”. De ese modo, aquella (como “concesionaria”) vendió durante muchos años los productos de esta última (naftas y lubricantes) bajo la marca Petrobras.

En algún momento estalló una guerra encarnizada entre ambas, al extremo de que Petrobras llegó a construir una estación de servicio propia a solo 400 metros de la otra, para reducir sus ventas, y, cumplido el objetivo, desmantelarla y demolerla.

Otras serias escaramuzas incluyeron la suspensión de descuentos, la imposición de precios diferenciales, etc.

Todo llevó a que la empresa propietaria de la estación de servicio decidiera dar por concluido anticipadamente su contrato con Petrobras y a iniciar un pleito por *resolución culpable*. (La resolución es el derecho que tiene una de las partes de un contrato de ponerle fin cuando la otra lo incumple).

Petrobras *reconvino* (esto es, presentó una contrademanda) por facturas impagas y

multas y negó ser la responsable de la resolución.

En primera instancia se otorgó a la concesionaria una indemnización por el lucro cesante causado por la resolución del contrato que la unía a Petrobras, con el argumento de que ésta había violado los deberes de *buena fe, corrección y rectitud en el obrar* y quebrado “la confianza propia que caracteriza a ese tipo de contratos [de largo plazo]”.

Para el juez de primera instancia, el contrato entre las partes fue resuelto por culpa de Petrobras. La relación “comenzó a fracturarse desde 1998, con reclamos recíprocos, hasta que en 2000 la concesionaria comunicó la resolución del contrato”.

“Existió —dijo el magistrado— una conexión íntima entre las conductas de Petrobras y las pérdidas de la empresa concesionaria, porque le restaron posibilidades de competencia equilibrada en el mercado”.

Pero también condenó a la estación de servicio a pagar ciertas multas a Petrobras por haber violado algunas cláusulas del

contrato que las unía y a devolver montos adeudados por la compra de combustible.

Las dos empresas apelaron. Al revisar la sentencia, la Cámara de Apelaciones¹ entendió que, a pesar de las críticas de Petrobras, el encuadre jurídico dado al contrato era correcto: se trataba de una concesión; esto es, de una relación en la que una de las partes (el concesionario) actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros y mediante una retribución pone a disposición su organización empresaria para comercializar bienes o servicios provistos por la otra parte (el concedente).

La definición legal, por otra parte, coincidía con el objeto previsto en los contratos celebrados entre las partes: “el cliente explotará la boca de expendio de combustibles en el carácter de concesionario, mediante la prestación al público de los servicios de expendio por surtidores...”

Sobre esa base, se analizaron las posiciones de las partes. Así, mientras Petrobras fue acusada de negar arbitrariamente el suministro de combustible, según su versión de los hechos dejó de vender a la concesionaria a crédito porque ésta mantenía un saldo deudor superior al acordado. Los jueces debieron interpretar si la decisión de Petrobras de suspender el trato preferente al que la concesionaria tenía derecho bajo el contrato fue arbitraria.

Basándose en los dictámenes de los peritos contables que examinaron los libros de Petrobras, los jueces concluyeron que el saldo deudor que la concesionaria excedía, efectivamente, el límite de crédito establecido. *Y la concesionaria no impugnó esta conclusión.*

¹ In re “Juan Gázquez SA c. Petrobras Energía SA”, CNCom (B), 2013; LL AR/JUR/5285/2013

Sin embargo, entendieron que ese hecho, por sí mismo, no convertía en legítima la suspensión de los descuentos a la concesionaria. Tampoco excluía la posibilidad de que Petrobras hubiera actuado abusiva o arbitrariamente.

¿Por qué? ¿Acaso no había un contrato que daba esos derechos a Petrobras? Sí, pero los jueces entendieron que la decisión de Petrobras fue súbita, tomada *sin intimar el cumplimiento en un plazo razonable y sin que mediaran previamente reclamos.*

Por otra parte, en el pasado Petrobras había tolerado muchas veces que la concesionaria excediera el nivel de endeudamiento acordado. Y luego de concluido el contrato, le llevó a Petrobras más de un año emitir una nota de crédito a la que la concesionaria tenía derecho desde dos años antes. Los jueces concluyeron entonces que las cifras de Petrobras *no provenían de cálculos ajustados a las condiciones del contrato.* Peor aún: los jueces concluyeron que Petrobras *fue negligente* en el manejo de la “cuenta de gestión” que mantenía con su concesionaria.

Todo eso, para la Cámara, *configuró un abuso en el ejercicio de la facultad que el contrato daba a la concedente.* Y si bien la concesionaria sostuvo solamente que se le habían suspendido las condiciones especiales de pago, “la situación de desgaste de la relación no pudo dejar de ser ponderada por cuanto necesariamente incidió en la formación de la voluntad de romper el vínculo contractual”.

El razonamiento es correcto... pero ¿no debió ser alegado por la concesionaria antes que traído a cuento por los jueces?

La Cámara también tomó en cuenta la actitud de Petrobras de invertir, construir y equipar otra estación de servicio a

cuatrocientos metros de la concesionaria para luego demolerla, sin razones técnico administrativas que la llevarán “a construir y derruir en tan poco tiempo una estación de servicio de la importancia y avance tecnológico” como la instalada.

Es interesante notar que en primera instancia (y luego en la Cámara) se consideró válida la grabación de una conversación telefónica entre representantes de la concesionaria y Petrobras, transcritas ante un notario y con intervención de un perito fonaudiólogo que reconoció las voces de los participantes, en la que Petrobras impuso a la concesionaria ciertos precios a sus productos en lugar de los que surgían del contrato y superiores a los aplicados por las restantes empresas petroleras. De este modo, se forzó a la concesionaria a reducir sus márgenes de ganancia para no perder su porción de mercado.

Petrobras también entendió que la concesionaria le había otorgado un plazo muy breve para cumplir con el contrato, pero los jueces coincidieron con el criterio de primera instancia según el cual “el contrato se encontraba prácticamente resuelto en los hechos y la relación entre las partes hacía prácticamente imposible continuar con la concesión”. La resolución decidida por la concesionaria, para los jueces, “fue prácticamente inevitable” y “la

única alternativa posible para evitar mayores perjuicios”.

Resulta evidente, al analizarse la sentencia, la importancia atribuida por los jueces a la existencia de conductas abusivas y desleales. Si bien es probable que a veces los jueces tengan en cuenta los tamaños relativos de las empresas que litigan y tiendan subjetivamente a favorecer a la parte más débil, en este caso las pruebas demostraron que Petrobras actuó abusivamente (por ejemplo al negar descuentos a los que la concesionaria tenía derecho o desatender los reclamos que se le formulaban).

El episodio de la estación de servicio construida y equipada con el propósito de destruir la rentabilidad de la concesionaria fue determinante para concluir “que la viabilidad de la relación era impensada”.

Se trata de un fallo interesante, donde los jueces se acercaron peligrosamente a los límites de sus facultades al tomar en consideración factores que ni los propios litigantes alegaron. Lo hicieron, sí, sobre hechos probados.

Está bien que los jueces ejerzan una capacidad “integradora” de las circunstancias que rodearon la relación entre las partes, pero ella debe ser ejercida con suma cautela.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**